

Garantizar el futuro

No cabe duda de que nos encontramos en un momento de gran dificultad para la economía a consecuencia de una crisis que dura ya cinco largos años y cuyas consecuencias son bien conocidas en el entorno laboral y social.

Las políticas de recortes desarrolladas por los gobiernos que han gestionado la crisis nos han situado a la cabeza del desempleo y han deteriorado la incipiente sociedad del bienestar.

Los ataques directos a la educación, la sanidad y las pensiones se justifican y amparan como la única fórmula posible para salir de esta crisis. Se evidencia, sin embargo, una deriva perversa hacia una crisis de fundamentos ideológicos, tanto en las propuestas de presente como, en lo que es más grave aún, en las de futuro.

Una crisis que, no hay que olvidar, nace como consecuencia del escaso control de los sistemas financieros en una economía globalizada donde la relación coste/beneficio se desequilibra y pasan a imperar las políticas de máxima rentabilidad por el mínimo esfuerzo inversor.

Esta falta de control ha invertido el equilibrio necesario entre la economía productiva (la real), y la economía financiera (la virtual). Sirva como dato para confirmar esta tesis el que en el año 2011 las rentas del trabajo en el conjunto de la economía nacional representasen el 47% y en 2013 el 43%.

Entre 1995 y 2008 los beneficios empresariales que se dejaron de reinvertir en los procesos productivos pasó del 39% al 60%, lo que empeoró la productividad y la competitividad de las empresas.

En este sentido, se está abriendo una tendencia muy arriesgada que gira sobre el dogma de la competencia como elemento diferenciador para salir de la crisis y, dentro de esta, la competitividad basada en la reducción de los costes salariales, sin atender a otros elementos centrales como pueden ser la inversión, el valor añadido de los productos, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Las consecuencias de estas políticas se están dejando sentir de forma muy

negativa. Los gobiernos aplican políticas de recortes de derechos y libertades que ponen en riesgo la sociedad del bienestar y los fundamentos sociales y democráticos.

Al mismo tiempo, las empresas y las grandes patronales, se dejan llevar en muchos casos por estas políticas de austeridad y recortes, realizan apuestas cortoplacistas, al tratar de mejorar la competitividad y la productividad, tanto por la vía de la devaluación de los salarios, como por la reducción del empleo. Renuncian así a un futuro basado en el valor añadido, la I+D+i, la formación, la capacitación de los trabajadores y la excelencia en los procesos productivos.

En España se evidencia una falta de cultura industrial, que durante décadas se ha demostrado en la nula voluntad de apostar por este sector como motor de

la economía. Tanto es así, que se ha llegado a extender y a conformar como un dogma la idea de que la mejor política industrial es aquella que no existe.

Está demostrado que los países que más crecen lo hacen en base a una industria fuerte (BRICS) y que los que mejor soportan la crisis son

los más industrializados. El peso medio de la industria en el PIB europeo es del 16%, en el alemán del 22 y en el español del 13%.

Una de nuestras preocupaciones era y sigue siendo, cuándo, pero sobre todo, cómo, saldremos de esta crisis. Apostábamos y apostamos por la necesidad de realizar un cambio en el modelo productivo. Pero los hechos son tozudos y es evidente que se ha desaprovechado la oportunidad.

Es cierto que la industria española ha venido perdiendo peso sobre el PIB desde los años 90, pero lo más preocupante es que lo siga perdiendo en estos momentos.

Esto es así porque el Gobierno no realiza una clara apuesta por la industria. La prueba más evidente de ello son los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que destinan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo 5.781 mill onas de euros, una cantidad que se ha visto reducida en un 1,6%, si no se

Se ha extendido como un dogma aquello de que la mejor política industrial es la que no existe

tiene en cuenta el incremento de la partida dedicada al déficit de tarifa eléctrica (26,4%). Bajando de un 0,44% del total de gasto asignado en 2013 al 0,41% en 2014.

Mientras tanto, los principales indicadores de los sectores industriales de nuestro ámbito siguen una tendencia negativa. Desde que arrancó la crisis la inversión ha caído un 42%, el valor añadido un 14%, el Índice de Producción Industrial un 4%, el tejido industrial ha perdido un 7,6% y el empleo del sector ha perdido un 33%.

Se resalta como elemento importante en la recuperación económica el superávit comercial de la industria en 2013, sin embargo no se tiene en cuenta que este dato, positivo en principio, se debe al incremento de las exportaciones en un 8%, a la vez que a una caída del 10% en las importaciones en nuestros sectores. Y es que si bien es necesario mejorar la exportación, en ningún caso debemos olvidarnos de la demanda interna. Lamentablemente las políticas actuales no van en esta dirección.

Entre los retos de presente y futuro de la industria española está la internacionalización, cuestión que debería verse facilitada por acción de política exterior de los gobiernos.

Necesitamos converger con Europa en I+D+i (la inversión en España es del 0,8% sobre el PIB, mientras que en Europa es del 1,5%), aspecto muy relevante para la industria española en general, y en particular para las pymes, dada su menor disponibilidad de recursos, lo que nos llevaría a hacernos estas dos preguntas: ¿sería adecuado un tejido empresarial de mayor capacidad inversora?, ¿se está haciendo algo para corregir este déficit?

Otros aspectos relevantes necesarios para potenciar la industria son el impulso de la formación profesional, el acceso a la financiación, así como una política energética capaz de contener el incremento de los precios. España es el quinto país europeo con mayor coste en energía industrial.

Destacar también la importancia que tiene mantener un grado suficiente de soberanía en la toma de decisiones en aquellos sectores y/o empresas considerados como estratégicos, pudiendo establecerse incluso por medio de modelos mixtos públicos-privados.

En definitiva, poner en marcha políticas activas a favor de la industria, por medio de una política industrial que coordine iniciativas del sector privado, pero también públicas por medio de medidas horizontales y sectoriales.

Mirando a Europa

La nueva agenda europea pretende invertir el proceso de deterioro industrial al que estamos asistiendo, donde a través del proyecto RISE (Renacimiento de la Industria para una Europa Sostenible), se quiere que la industria europea alcance un peso del 20% sobre el PIB.

En este sentido, Europa debe pasar de una vez de las declaraciones de intenciones a los hechos, con la puesta en marcha de mecanismos concretos, incidiendo en las políticas sectoriales, así como en la necesidad de afrontar el problema del incremento de los precios de la energía en la industria, el acceso a la financiación, así como implementar los esfuerzos en I+D.

En definitiva, se evidencia la necesidad de poner en marcha políticas proactivas en defensa de la consolidación de la industria como motor de crecimiento y garantía de la sociedad del bienestar, alejadas de las políticas de impulsos que hasta ahora se han llevado a cabo en Europa.

Por ello, no cabe más que explorar alternativas a este modelo anacrónico y cortoplacista, apostando con claridad por políticas industriales en todos los ámbitos, (UE, Gobierno central y autonómicos), fomentando un modelo productivo que genere garantías de futuro.

Desde la Federación de Industria de CCOO venimos haciendo una firme apuesta por la industria antes incluso de la llegada de la crisis, desde la convicción de que sin una industria fuerte no es posible la sociedad del bienestar. La actividad industrial genera empleo de mayor calidad y, además, ejerce de actividad económica tractora, ya que por cada empleo industrial se generan otros tres indirectos ■

Juan Carlos Álvarez Liébana /
Secretario de Política Industrial
Federación de Industria de CCOO

